

LOS DILEMAS DE LA DEMOCRACIA MUNDIAL

David Ibarra
Julio de 2011
Fundación Ebert Stiftung

El mundo y las naciones se encuentran en una encrucijada. Necesitan acomodar sus políticas a hechos y circunstancias arduas de armonizar, por cuanto el orden internacional sufre cambios y enfrenta retos enormes y por cuanto en el orden interno de los países resulta cada vez más escabrosa la convivencia de la democracia con la persistencia de disparidades sociales sustantivas. Puntualicemos brevemente algunos de los problemas más importantes:

Individualismo, mercado y crisis

A partir de 1972, en el campo conceptual y de las políticas públicas, retrocede el reformismo social ante el avance de las estrategias estabilizadoras y aperturistas. Estas últimas han favorecido a la globalización, pero detenido la ampliación de las garantías sociales, supuestamente por ser antagónicas a la eficiencia, al ahorro y a la inversión.

En el campo de las ideas, ganan terreno los valores del individualismo por encima de los del alcance social. En cierto modo, se trata de una reacción: con anterioridad, el individualismo había sido desterrado casi por entero de las ciencias sociales. Como resultado, el péndulo ideológico altera radicalmente su dirección hasta marginar los temas colectivos de la política económica occidental. Los nuevos paradigmas postulan que los mercados son eficientes y toman al individuo como un ser dotado de racionalidad para elegir, decidir entre opciones, o alterar el marco institucional, naturalmente dentro de los límites permisibles de la economía neoclásica.

En consecuencia, el conservadurismo supuestamente democrático se oculta detrás del autoritarismo de los paradigmas económicos. Estos últimos, hacen

creer en la sabiduría intrínseca de los mercados para producir las mejores soluciones, mientras condenan el intervencionismo colectivo, estatal, siempre propenso a errar, pasando por alto, desde luego, las crisis hondas y repetitivas de los propios mercados. Así, la política social de los países queda inserta en el régimen de la competencia internacional que la conduce a la limitación y privatización de los servicios sociales, con el triple propósito de constreñir gasto público, acrecentar artificiosamente la competitividad y multiplicar los negocios privados. Obsérvese que la ideología dominante achaca los desajustes fiscales al excesivo intervencionismo estatal que sobredimensiona, por ejemplo, los alcances del Estado Benefactor, resta vitalidad a las empresas y creatividad al nombre económico.

Sin embargo, el imperativo de combatir a la depresión global, rompe, si se quiere transitoriamente, el canon económico neoliberal y lleva a implantar, medidas heterodoxas lo mismo fiscales que monetarias y a extender el brazo interventor de los estados. Así se abre un debate ideológico de alcances limitados sobre los enfoques dispares de los países líderes en torno a la cura y prevención de la crisis.

Algunos gobiernos se inclinan por imprimir continuidad a las políticas heterodoxas, monetarias y fiscales hasta asegurar la plena reactivación de las economías, mientras otros quisieron regresar cuanto antes al mundo anterior, aunque los costos del ajuste queden casi por entero sobre los hombros de las familias y los trabajadores, mientras se libera de responsabilidad a los banqueros, a los gobiernos y a las empresas rescatadas con recursos públicos. Poco a poco va relegándose al olvido la idea de implantar regulaciones universales más estrictas a los sectores financieros y la de hacerles pagar al menos una porción de los costos de la crisis.

Sea como sea, parece afianzarse la visión conservadora en las posturas de los gobiernos líderes, como los Estados Unidos y Alemania con claro reflejo en

los acuerdos del G-20. El primero, pospone la corrección de los enormes privilegios fiscales a los grupos adinerados, enmienda apenas las deficiencias regulatorias de los bancos y vuelca la política contracíclica en favor de las propias instituciones financieras con descuido del empleo y del endeudamiento de las familias. Y, el segundo, fuerza programas draconianos de ajuste en los países periféricos de la Unión Europea, aun a riesgo de la vida misma de la unión monetaria. Además, busca implantar restricciones al modelo económico y social europeo como condición al incremento del fondo financiero de rescate a las naciones con problemas. A tal fin se propone convenir un programa de competitividad, cuyo contenido supone aplicar sanciones automáticas a los países infractores del Pacto de Estabilidad, eliminar la indexación de los salarios por inflación y ligar sus incrementos a la productividad -que despoja de toda función redistributiva a las remuneraciones al trabajo-, limitar constitucionalmente los déficit o el endeudamiento público de los países, elevar la edad de jubilación de empleados y trabajadores. En cierto sentido, se quieren aprovechar los apremios de la crisis para establecer la coordinación de las políticas fiscales en la zona del euro conforme a lineamientos poco progresistas.

Europa y Estados Unidos coinciden en el modo de regenerar a sus sistemas financieros a costa de los presupuestos públicos y, en última instancia de los contribuyentes y la generalidad de los ciudadanos. El caso de la Unión Europea es ilustrativo. Ahí la estabilización de Grecia, Irlanda y Portugal, incorpora severas medidas de ajustes contraccionistas en los sistemas fiscales y los ingresos o los derechos de sus poblaciones, que quizás salven a los bancos, pero que difícilmente resolverán el problema de la acumulación de las deudas públicas, tal como ocurrió en América Latina en los años ochenta. En contraste, excluyen la reestructuración de los adeudos, esto es, reconocimiento de pérdidas a cargo de las instituciones financieras prestamistas o de los tenedores de bonos, sea mediante la cancelación parcial o directa del valor de los préstamos, la reducción de las tasas de interés por debajo de las cotizaciones de mercado o el simple

alargamiento de los vencimientos. Estas últimas instituciones, transfirieron irreflexivamente flujos de recursos o especularon atraídos por tasas de interés excepcionales, protegidas por innovaciones que cancelarían los riesgos de las propias instituciones financieras.

Frente a esos antecedentes no es de extrañar que el conjunto de los países del G-20, en su última reunión (Toronto), adoptase la postura de reducir al 50% sus déficit fiscales en un plazo perentorio de tres años, confirmando, así, que los banqueros y prestamistas van ganando la batalla, que persisten en el secuestro de la democracia. Pero surgen sorpresas inevitables de variado signo. Ahí está la probable necesidad del segundo rescate de la economía griega ante la oposición a soluciones más radicales, como la suspensión de pagos o la reducción de los adeudos a cargo de las instituciones financieras prestamistas. O el recrudescimiento de las condicionalidades al rescate de Portugal cuya aprobación está pendiente de que su gobierno acepte garantizar los adeudos resultantes con bienes reales del patrimonio público. Como se ve, el intervencionismo estatal o supranacional, conservador o progresista, sigue siendo insoslayable en el reordenamiento de los mercados.

Desde otro ángulo, el proteccionismo en apariencia abolido, reaparece con el vestuario de la manipulación de los tipos de cambio que practican lo mismo los países industrializados que los emergentes. De distinto modo, todos tratan de defender sus balanzas de pagos y su empleo interno, devaluando, manteniendo subvaluadas sus monedas o impidiendo su apreciación ante el retraimiento del comercio internacional y la persistencia de graves desequilibrios comerciales entre las potencias líderes. Como reflejo, renacen, cobran vigor, los controles de capitales ante los desplazamientos peligrosos de flujos de capital golondrino y se disuelve la creencia que la entrada de capitales del exterior invariablemente beneficia a los países receptores.

Aun así, los planteamientos ideológicos en boga no cejan de acentuar la presión en contra de los estados benefactores y en favor de restablecer, hasta donde posible, el orden financiero precrisis. En consecuencia, la distribución de los costos del desbarajuste económico mundial, obliga a hacer otra pausa en la lucha por la ampliación y universalización de los derechos sociales. El Primer Mundo logra devolver estabilidad precaria a los mercados financieros, pero sus mercados permanecen estructuralmente debilitados, como lo demuestra la lentitud de la recuperación, singularmente en proveer empleo a los desocupados, tanto como en los notorios rezagos de su dinámica económica frente a la de los países emergentes.

Recursos planetarios finitos

Desde décadas atrás, el Club de Roma al examinar el desarrollo mundial, ha subrayado la presencia de límites casi irrebasables al mismo con los recursos disponibles y singularmente con las tecnologías e instituciones conocidas. Por ende, es difícil o imposible sostener indefinidamente el crecimiento universal por los mismos cauces e igualar los estándares de bienestar de la población de las distintas latitudes del planeta. Ya el ascenso del poder de compra ciudadano en los países más populosos (China, la India), crea escasez de materias primas, eleva sus precios, alienta la especulación y anuncia una crisis alimentaria de proporciones globales.

A conclusiones análogas lleva el análisis de la sostenibilidad ecológica del mundo. El funcionamiento de los mercados conduce a la destrucción de la naturaleza en ausencia de regulaciones apropiadas. Priva el riesgo de trastocar peligrosamente la vida planetaria, sin la adopción de políticas colectivas, mientras eso mismo dificulta a los países emergentes acelerar la eliminación de la brecha del atraso. Si en el mundo subdesarrollado se extendieran los patrones de consumo y producción prevalentes en las zonas industrializadas, pronto se llegaría a una situación ecológicamente insostenible. Son notorias, además, las

deficiencias de los compromisos internacionales: los países más contaminadores del medio ambiente, son los que más se resisten a la adopción de estrategias cooperativas y donde es menor la disposición a compartir los costos del saneamiento ambiental. Hasta ahora, los esfuerzos comprometidos son claramente insuficientes para desarrollar energías limpias, revolucionar tecnologías o combatir el deterioro ecológico planetario.

La reconfiguración de la economía internacional

La historia no se ha detenido. En pocos años se ha transitado de un mundo unipolar a otro multipolar. Pero, a diferencia de tiempos idos, los liderazgos no se trasladan simplemente entre miembros o retoños del Primer Mundo, sino que las nuevas potencias surgen de la periferia al poder internacional. Por supuesto, se trata de fenómenos larvados desde tiempo atrás. Sin embargo, llama la atención la brevedad con que maduran y la amplitud de sus alcances transformadores. En efecto, el este y el sur de Asia ya constituyen un núcleo regional que transforma la distribución de la producción y de las finanzas del planeta y, con ella, los mismos liderazgos internacionales. Hoy por hoy, es, a su escala, el único núcleo dinámico compensador de las fuerzas recesivas que todavía aherrojan al mundo.

En 2010, China rebasó al Japón al ocupar el segundo lugar mundial por el tamaño de su economía. Ya en 2008, el valor de sus exportaciones de mercancías superaron a las de Estados Unidos y eran similares a las de Alemania. En esa misma fecha, las reservas internacionales de divisas de Asia (45.3% del total) y China (26.4%) superan con creces a las del Primer Mundo (22.9%). Buena parte de los países desarrollados transfieren actividades manufactureras –y los empleos que la acompañan-- a las naciones emergentes, mientras se especializan en el sector de servicios. De aquí que se recrudezcan sus problemas de desempleo y de los propios desequilibrios comerciales. En cierto modo, China comienza a perfilarse como el centro exportador, industrial y financiero de la

globalización a paso y a medida que el renminbi se convierta en divisa internacional y las inversiones chinas sigan creciendo en el mundo. Y sin embargo, ese país tenía (2008) un ingreso *per cápita* medido en poder de compra de un octavo del norteamericano.

Quiérase o no, el ascenso de China y la India es alentador aunque determine exigencias mayúsculas de ajuste político y económico a los que están y estarán sometidos todos los países y las propias estructuras institucionales del orden económico internacional. El G-7 o el G-8, ya han debido transformarse en el G-20; el FMI y el Banco Mundial, comienzan a cambiar su anticuada estructura que databa casi desde Bretton Woods; la normatividad del Consenso de Washington es ya historia pasada. Pronto la agenda del desarrollo y el mismo orden económico internacional antes decididos, impuestos, por el Primer Mundo, ahora necesitará de la anuencia de las naciones emergentes.

Seguridad colectiva

Los entorpecimientos al sano y sostenido desarrollo universal, contrarían las aspiraciones democráticas a erradicar las enormes desigualdades que prevalecen en el mundo y dentro de los países. El desempleo pasa de ser cíclico a ser crónico, se precarizan las condiciones laborales, la informalidad ayuna de derechos sociales se expande a ritmos antes desconocidos. En más de un sentido, la inseguridad social de la época, se asocia a la falta de prelación colectivas frente al predominio del cortoplacismo individualista e inestable de los mercados. De su lado, las imperfecciones o el debilitamiento de los estados benefactores erosiona la cohesión social interna de los países, estorba la universalización de derechos humanos exigibles y abre la puerta a la globalización del crimen. De igual manera, la interdependencia creada por la globalización económica, crea huecos enormes en la coordinación de políticas en múltiples esferas de la actividad humana y hace resaltar la ausencia de una especie de gobierno universal.

A la falta parcial de convergencia en las políticas de los países líderes, en torno a la salida de la crisis, se añaden disparidades crecientes en la evolución comparativa de los países: unas economías se expanden, otras quedan sumidas en el estancamiento, unas terceras, simplemente se rezagan. Pero en todas, casi sin excepción, persisten disparidades sociales manifiestas. Así, frente a las restricciones cada vez mayores al crecimiento, todavía se cuentan más de novecientos millones de personas que padecen hambre en el mundo, pese a los singulares progresos de China en la materia. Al mismo tiempo, se acentúan las dislocaciones distributivas aun en las naciones que mejor avanzan en abatir la pobreza, como lo prueba el recrudecimiento de la concentración del ingreso en Chile o China.

Además hay factores en marcha que tornan cada vez más arduo satisfacer criterios de igualdad y de inclusión sociales. Tómese, a título ilustrativo, el dilema del envejecimiento de la población en el mundo. A menos que se admita la creación de un nuevo grupo de marginados o que se hagan retroceder los derechos adquiridos –sobre todo en materia de pensiones y servicios de salud-, el costo de atender ese fenómeno alcanzará cifras enormes. Según estimaciones –acaso exageradas- del Fondo Monetario Internacional, hacia 2050 los cuidados asociados a la población vieja multiplicaría varias veces el costo de las medidas anticrisis adoptadas hasta ahora por los miembros del G-20.

Junto al angostamiento –por desempleo o informalidad- de la proporción de trabajadores activos sobre cuyas espaldas descansan servicios sociales y jubilaciones, los fenómenos demográficos gestarán presión sobre los presupuestos gubernamentales y familiares. De ahí las tendencias a limitar el alcance de los estados benefactores, frecuentemente sin compensaciones de orden tributario o redistributivo. Por su parte, la crisis descarrila el remozamiento de los sistemas de seguridad social del Primer Mundo por la vía de la inmigración, haciendo que el ajuste demográfico recaiga más sobre los

derechos adquiridos de los trabajadores de cada país. Por lo demás, el fenómeno afecta diferencialmente a los países, dependiendo de su estructura demográfica, de la amplitud de sus derechos sociales y, en algunos casos, de la apertura a la inmigración; es particularmente severo en Japón –sin mencionar la influencia de los fenómenos deflacionarios del país--, Corea, España y Canadá. En las naciones periféricas, como México, a la marginación asociada a la informalidad o al desempleo de la fuerza de trabajo, se sumará casi inevitablemente la desatención a buena parte de la población envejecida.

A los factores estructurales de la exclusión y la desigualdad social, se añaden desde 2008 los impactos asimétricos de la crisis y de los remedios a la misma en los diferentes países. Problemas largamente larvados junto a fórmulas distributivamente sesgadas de combatir la llamada “Gran Recesión”, causan disturbios sociales abiertos en un número cada vez más grande de países. Las protestas hasta ahora circunscritas a Grecia, Irlanda, Portugal, España, Inglaterra, Francia, Holanda y las más serias de Túnez, Egipto y Libia, reflejan el descontento generalizado de las poblaciones y abren la puerta tanto a contagios peligrosos, como a aprendizajes democráticos, constructivos, entre países. La crisis es la gota que derramó el vaso al combinar mayores sacrificios económicos con menor autonomía política de los gobiernos o de las mayorías ciudadanas para influir en el curso las políticas públicas nacionales ya constreñidas de antemano por efecto de la globalización.

No es entonces de extrañar que la crisis global tornará evidente la obsolescencia del consenso neoliberal empeñado en dar primacía a la eficiencia por encima de las garantías a la estabilidad y seguridad económicas de los ciudadanos. Ha quedado otra vez de manifiesto la interdependencia irreductible entre los fenómenos económicos, sociales y políticos. Por eso, hoy en día resulta difícil validar el pacto democrático fundamental consistente en aceptar la apertura de mercados a cambio de fortalecer los estados benefactores --como vía

de amortiguar las vicisitudes mercantiles-- y lograr, al propio tiempo, avances en la equidad internacional. Surge, entonces, la interrogante central de cómo alcanzar sistemas de protección colectiva, de reafirmación de la democracia, frente al predominio de mercados individualistas y políticas conservadoras que no toman en debida cuenta los límites sociales, físicos o tecnológicos opuestos al desarrollo y a la igualación del bienestar de los ciudadanos, sin distinción de nacionalidad, clase, género o color de piel.

Una conclusión parece inevitable: hoy por hoy, la solución tradicional a las tensiones sociales por la vía del desarrollo, por la expansión del pastel a repartir y por las garantías de los estados benefactores, parece semiagotada, habría que complementarla más y más con políticas directamente redistributivas, casi siempre resistidas por las elites de todas las latitudes.

Ahondando la crisis económico-democrática se sitúan las crisis energética y la ecológica para tornar excepcionalmente difíciles las soluciones. Por eso, será necesario volcar esfuerzos y recursos mundiales en revolucionar la tecnología hacia finalidades humanas, hacia la ampliación de las fronteras del desarrollo, la protección ecológica, el combate a la desnutrición, la enfermedad y la desigualdad entre las poblaciones. Quiérase o no, se trata de un complejo dilema ético y político, que trasciende al tema acotado de la reconstrucción posible e inmediata de los órdenes económico y financiero internacionales que sólo podrían cimentarse por etapas, hasta que se asiente por entero la nueva constelación de fuerzas e intereses que resulten dominantes en el mundo.